

Discusiones teóricas acerca de las técnicas biopolíticas de control desplegadas en Jerusalén Este: ¿es posible hablar de necropolítica?

Ignacio Rullansky*

En este trabajo se indagará acerca de la pertinencia teórico-epistemológica acuñada por Achille Mbembe de “necropolítica”, para analizar la realidad política y cultural jerusalimitana. Se emplearán fuentes secundarias tales como investigaciones de otros autores e informes especializados sobre la cuestión, para dar cuenta de los supuestos que la aplicación de este concepto acarrea, en los términos que fueron sugeridos por el autor. De esta manera, se valorarán sus virtudes y se criticarán sus inconveniencias prácticas, proponiendo una perspectiva distinta que termine echando por tierra la consideración de este instrumento teórico como recurso para abordar una serie de circunstancias que se viven, en la actualidad, en Jerusalén Este.

PALABRAS CLAVE: Jerusalén Este – biopolítica – necropolítica – ciudad – control de las poblaciones

The aim of this paper is to inquire about the theoretical and epistemological relevance of Achille Mbembe’s “necropolitics” concept, in order to analyze the political and cultural reality of East Jerusalem. Secondary sources such as investigations from other authors and specialized reports on the issue will be used to account for the assumptions that the application of this concept entails, according to the terms that were suggested by the author. Thus, both its virtues and practical inconveniences will be taken into account and criticized, with the aim of proposing a different perspective concerning this theoretical tool as a resource to address a series of circumstances that are currently taking place in East Jerusalem.

KEYWORDS: East Jerusalem – biopolitics – necropolitics – city – surveillance

El propósito de este trabajo es analizar la articulación entre el despliegue de las agencias de control social penal pertenecientes al Municipio de Jerusalén y al Estado de Israel, junto con dispositivos de seguridad privados a lo largo del territorio de Jerusalén Este. Para ello, tomaremos de manera problemática la noción elaborada por el politólogo camerunés Achille Mbembe, de “gobierno privado indirecto” (2006). La idea será exponer algunas reflexiones acerca de la pertinencia teórico epistemológica que comporta este movimiento, es decir, de valernos de este concepto para pensar una realidad tan diferente a la del África post colonial como es la jerusalimitana.

Esta propuesta encarna, por cierto, una subsiguiente consideración, que tiene que ver con el concepto más amplio de “necropolítica” acuñado por dicho autor. De fuerte inspiración foucaultiana, Mbembe recurre a la caja de herramientas del

“arqueólogo del saber” para formular su corpus teórico. Pero antes de ahondar sobre esta cuestión, que será el eje del trabajo, introduciré ciertas observaciones sobre el carácter político de Jerusalén a partir de una serie de discusiones que entablan algunos autores.

Para comenzar, repasaremos los reparos que Michael Dumper sugiere tener en cuenta al tomar la noción de “post-conflict cities” elaborada por Alice Hills para estudiar la realidad jerusalimitana (Dumper, 2013). Esta categoría de análisis supone que ciudades como Beirut, Nicosia, Kirkuk y Jerusalén, entre otras, recorren dos fases contiguas vinculadas al establecimiento de un Estado soberano que ejerce la justicia, que administra las políticas públicas, que articula las agencias de control sobre su población (Hills, 2009). Se trata, antes que nada, de poderes estatales emergidos de conflictos bélicos vinculados a la disputa hegemónica entre dos o más

* Licenciado en Sociología (UBA). Departamento de Medio Oriente, Instituto de Relaciones Internacionales, UNLP; Centro de Estudios de Religión, Estado y Sociedad, Seminario Rabínico Latinoamericano Marshall T. Meyer.

grupos étnicos, confesionales, nacionales, en este caso, sobre una misma circunscripción urbana. Las “post-conflict cities” encarnan así, desafíos que otras ciudades no necesariamente experimentan. En el análisis, surgen eminentemente dos variables independientes que son, la provisión de agencias de seguridad y la garantía del ejercicio de la ley, y ambas se cristalizan gracias al despliegue institucional de servicios públicos, de la gobernanza municipal y del desarrollo de instituciones cívicas. A propósito, una dimensión crucial de este tipo de análisis radica en que la consagración de la seguridad es lograda de acuerdo al reconocimiento de la diversidad étnica y cultural existente en la ciudad, es decir se halla estrechamente vinculada a la adopción de medidas tendientes a incorporar ciertos grupos a la ciudadanía, en definitiva, a una planificación de políticas que sedimentasen la legitimidad de estos “Estado cuestionados” (contested states) tanto por la comunidad local como por la internacional (Dumper, 2013).

De la tipificación propuesta por Hills surgen dos fases que recorrerían las “post-conflict cities”: una primera de estabilización y apaciguamiento de la violencia generalizada a partir del cese de hostilidades entre las partes, seguida de la segunda, que comportaría el establecimiento de la ley (Hills, 2009). Esta segunda fase puede asumir dos posibles modelos de acuerdo a una serie de variables (la solidez o fragilidad del orden estatuido, la injerencia y el interés internacional en la seguridad dentro de la región, la naturaleza de las políticas preexistentes al conflicto). Dichos modelos de armado de políticas públicas son el gendarme o “duro” que supone el paso hacia uno más “suave”, que podríamos traducir como “policial” por cuanto refiere a la presencia de fuerzas de control que portan armas no letales. Independientemente de cuál se trate, ambos recurren a la articulación de tres tipos de estructuras organizacionales para ejercer su control sobre las poblaciones: centralizadas, descentralizadas y regionales (Dumper, 2013).

A pesar que esta conceptualización es útil como cuerpo teórico que permitiría abordar casos muy concretos, Dumper entiende que este esquema no es del todo adecuado para analizar la realidad jerusalimitana. Para este investigador, la transición de una fase de estabilización a una de establecimiento de la ley responde a un número de contingencias y factores políticos relativos a la legitimidad del Estado que impera sobre la ciudad o partes de ella, y sobre cuán legítimo es este Estado a los ojos de sus ciudadanos o residentes. Según mi punto de vista, esta ciudad no ha emergido del conflicto sino que se halla inmersa en él, y es de especial relevancia considerar que la dimensión del “contested state”, se lleva a un plano mucho más circunscripto y local, a la vez que los sucesos que tienen lugar en él generan fuerte repercusión en el ámbito internacional, tal vez pudiéndose hablar de una “constested city”, por cuanto

sus espacios y edificios públicos, privados, y especialmente los religiosos o que entrañan un valor cultural particular (la Explanada de las Mezquitas/Monte del Templo), como sus emplazamientos residenciales, todos se hallan atravesados por una serie de disputas simbólicas entre sectores seculares y religiosos tanto palestinos como israelíes¹.

“Estas tecnologías de gobierno, sumadas a la instalación de centrales policiales, producen una interrupción de la contigüidad geográfica entre los poblados palestinos, al tiempo que se impide su expansión territorial, y se da lugar a un simultáneo proceso de gentrificación al interior de los mismos, con miras a configurar una nueva identidad cultural en ellos.”

A tal respecto, Jerusalén Este se nos presenta como un caso histórico donde la fase de estabilización mencionada se encuentra, en todo caso, largamente prolongada, la legitimidad política cuestionada y la vigencia de una ideología chauvinista que marginaliza ciertos grupos en desmedro de otros, complica la transición de un modelo a otro (Dumper, 2013). Esto por cuanto la población palestina de Jerusalén Este, unas 290.000 personas en la actualidad, permanece en condición de residentes desde que el Estado de Israel anexó el territorio como resultado de la Guerra de los Seis Días, en 1967. Desde aquel entonces, y desde la mismísima constitución del Estado de Israel, la cuestión demográfica suscitó siempre un problema político para una sociedad mayoritariamente judía (históricamente in 70%) frente a una serie de minoría, de las cuáles los árabes fueron siempre la más importante (históricamente, cerca del 30% restante). Conforme fueron transcurriendo las décadas, la población judía secular experimentó una contracción en la tasa de natalidad (ocurre lo inverso dentro de los judíos ortodoxos y ultra ortodoxos), frente a un aumento significativo de la población árabe. Esta situación, sumado al control israelí

¹ Como puede comprobarse a partir de sucesos recientes de protestas violentas o que terminaron en situaciones violentas, que permiten hablar de una Tercera Intifada. Para ampliar sobre esto, puede consultarse artículos periodísticos como los siguientes: <http://www.haaretz.com/opinion/.premium-1.629570>, <http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Comment-Is-the-third-intifada-here-380875>, <http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/11/third-intifada-jerusalem-violence-temple-mount-religious-war.html>.

sobre territorios anexados, supuso el comienzo del diseño y de la implementación de una serie de técnicas biopolíticas de gobierno. Entre ellas, se destaca principalmente la promoción de la colonización judía, es decir, el establecimiento de barrios (settlements) que interrumpen la continuidad geográfica de las aldeas palestinas comprendidas a lo largo del territorio de Jerusalén Este, junto con otro tipo de emplazamientos como parques arqueológicos, universidades, edificios públicos, entre otros. Además de estos enclaves, también se ha alentado indirectamente la radicación de familias judías dentro de barrios árabes. Sin embargo, la técnica de control por excelencia ha sido la negación de permisos para edificar viviendas, lo que ha llevado a gran parte de la población a construir las indefectiblemente sin las debidas autorizaciones, implicando la posibilidad de enfrentar inminentes demoliciones. En ocasiones, muchas de estas restricciones se deben a que la Municipalidad ha establecido que ciertas áreas deben permanecer verdes, o que ciertos emplazamientos constituyen parques arqueológicos.

Además, el proceso de aliento de radicación y densificación de los barrios judíos que fueron asentándose progresivamente entre las aldeas árabes esparcidas a lo largo del territorio de Jerusalén Este, así como la gentrificación israelí dentro de los propios poblados árabes, devino en una de las técnicas más importantes para materializar la presencia física israelí en el territorio, apuntando a alterar la identidad del mismo (Chioldelli, 2012). Esta colonización israelí del territorio de Jerusalén Este toma ímpetu cuando en 1980 el Parlamento (Knesset) sanciona una ley que establece a Jerusalén como “capital eterna y unificada del pueblo judío”. A partir de entonces, asociaciones civiles como “Elad” empiezan a promover la compra y venta de propiedades inmobiliarias dentro de Jerusalén Este, con el fin de conseguir la radicación de población judía en barrios tradicionalmente árabes.

Estas tecnologías de gobierno, sumadas a la instalación de centrales policiales, producen una interrupción de la contigüidad geográfica entre los poblados palestinos, al tiempo que se impide su expansión territorial, y se da lugar a un simultáneo proceso de gentrificación al interior de los mismos, con miras a configurar una nueva identidad cultural en ellos.

De acuerdo a Dumper, hay tres dimensiones en que la ciudad de Jerusalén debe contemplar su planificación de políticas públicas. Una de ellas es el plano político administrativo, en tanto capital del Estado de Israel; la segunda, cual centro religioso, epicentro de disputas y tensiones donde tienen lugar acciones extremas de grupos radicales que ameritan la confección de políticas entendidas en calidad de “arreglos especiales”; y por último, en cuanto ciudad mundial capaz de atraer la atención internacional, factor que alienta a grupos fundamentalistas a

emplear la ciudad como escenario para publicitar sus acciones y amplificar el eco de sus demandas (Dumper, 2013).

En un artículo reciente, Dumper rastrea los informes de la ISA (Israeli Security Agency) acerca de los atentados terroristas perpetrados en la ciudad entre los años 2000 y 2009, para dar cuenta de una caracterización del reforzamiento de la ley a través de la articulación de distintas fuerzas policiales/gendarmes que obran en la jurisdicción de Jerusalén Este. Sin embargo, lo que nos interesará a nosotros, será poner el foco en los dispositivos de control relativos a compañías privadas desplegadas en el territorio que se articulan con las fuerzas estatales, es decir, observaremos la existencia de redes de cámaras de seguridad gestionadas y monitoreadas por empresas privadas, así como la presencia de personal de seguridad con alto entrenamiento militar o policial, pero que no pertenece a organismos públicos. Será a partir de este punto que veremos cuán apropiado es articular la noción de “gobierno privado indirecto” de Mbembe para el caso jerusalimitano, o bien si es posible construir nuevos elementos teóricos tomando el mismo como disparador.

La Municipalidad de Jerusalén cuenta con un Departamento de Supervisión de Construcción encargado de relevar cualquier cambio en la fisonomía urbana de los barrios y poblados palestinos de Jerusalén Este, registrando con fotografías e imágenes satelitales cualquier modificación o construcción reciente, buscando identificar si cada caso cuenta o no con la debida autorización. Pero además de la existencia de este personal y de las distintas fuerzas policiales que patrullan la zona, existen entidades gubernamentales adicionales que se solapan en sus competencias a éstas. Por un lado, está la Autoridad de Naturaleza y Parques, la cual, facultada por la Municipalidad, opera sobre una jurisdicción precisa que rodea el Monte Scopus. Esta entidad reúne a sus propios inspectores y lleva a cabo sus propias demoliciones, siendo dirigida además por un colono y ex empleado de la organización Elad, nombrada anteriormente, Evyatar Cohen (Dumper, 2013).

Por otro lado, debemos reconocer que la influencia de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) en el territorio alguna vez fue relevante, si bien hoy en día no juega un rol significativo para este análisis. Básicamente lo que sí debe rescatarse es que antes de los Acuerdos de Oslo y del advenimiento de los gobiernos de derecha en Israel, la ANP tenía injerencia dentro de los poblados palestinos jerusalimitanos a través de delegaciones del partido Fatah y gracias a la cooperación con entidades israelíes; luego el panorama cambió e Israel comenzó a desplazar a estos funcionarios, construyendo los célebres muros que separan Jerusalén Este de Cisjordania. Lo que terminó ocurriendo fue que, siempre y cuando fuese posible, estas instituciones se trasladaron hacia los límites entre Cisjordania y Jerusalén, para poder permanecer relativamente próximos a esta población.

Ahora bien, como ya adelantamos, se observa en el terreno la presencia de entidades de seguridad privadas. Las mismas guardan algún dejo de similitud con las que pueden encontrarse en otros territorios, como por ejemplo en ciertos asentamientos israelíes de Cisjordania. Sin embargo, aquí nos ocuparemos de enclaves realmente muy pequeños que comprenden a veces, tan sólo una casa o un departamento habitado por una familia judía israelí, en pleno barrio palestino de Jerusalén Este. Este tipo de colonización se ha venido produciendo desde los años 80's y se ha promovido especialmente desde la década del 2000. Fue en ese año cuando a propósito de las negociaciones que tuvieron lugar en la Cumbre de Paz de Camp David, que el ex presidente estadounidense Clinton propuso una fórmula² que se condensó en la proposición de que allí donde hubiese mayoría judía en los territorios de jerusalimitanos, los mismos pertenecerían al Estado Israelí, y viceversa para el caso palestino (Dumper, 2009).

Jerusalén Este, aunque bajo dominio israelí, mantiene entonces una población árabe numerosa que posee la ciudadanía jordana, carece de la israelí (por tanto, no tienen acceso al voto), y cuyo acceso a servicios públicos en calidad de "residente"³

2 "Although there was no formal record of the talks, from media leaks and post-mortems we can discern that the Israeli proposals comprised two main elements: first, Israel would relinquish control over the northern Palestinian suburbs of the city to the state of Palestine and devolve administration in the central areas of East Jerusalem to Palestinian bodies. Second, Israel would retain overall sovereignty and security control over East Jerusalem, including the Old City. As these did not take into account the Palestinian view that a withdrawal to the 1967 border (as expressed in UNSCR 242) was the starting point of an agreement, they were rejected by the Palestinians. Indeed, as has been argued elsewhere, from a Palestinian perspective, the Israelis were not offering them much more than they already had. In the attempt to bridge the two positions over Jerusalem, the US President Clinton suggested a formula for allocating sovereignty based on demographic criteria, known as the "Clinton Parameters". This would have led to the partition of the city, including the Old City. He further recommended Palestinian sovereignty over the Haram al-Sharif and Israeli sovereignty over the Western Wall and special arrangements for excavations underneath the Haram. While both sides very reluctantly accepted the Clinton parameters, for the Palestinians they constituted a further example of US support for Israeli acquisitions in East Jerusalem since 1967. Depending on where one draws the line of the city limits of Jerusalem, the greater proportion of the land area of East Jerusalem has been acquired by Israel for its colonies there and a formula based upon demographic criteria was bound to lead to significant loss of land for the Palestinian side". (Dumper, 2009)

3 "It should be noted that the Arab population of Jerusalem includes mainly Arab Palestinians holding a resident status (not citizens). This status was given to 68,700 Arab Palestinians who were included in Jerusalem after 1967 as a result of the expansion of the city's boundaries. Over the years the Arab Palestinian population of Jerusalem increased both due to natural increase and through the reunion of families, whereby resident status was granted to people who qualified for it. Resident status grants its holders many rights, including social rights and freedom of movement in Israel. These rights were not granted to other Arab Palestinians living beyond the Green Line. Over time many of the Arab Palestinian inhabitants of Jerusalem moved out to villages adjacent to Jerusalem. Most of them declined to report leaving the city in order to keep their resident status and the rights this status grants them. On the other hand, there are Arab Palestinians who are not residents or citizens of Israel that live in Jerusalem without a permit and are therefore now considered illegal residents. The sizes of these two populations are unknown and the estimates of them can only be considered guesses; thus they do not appear in the population data published in the yearbook. As a result of the construction of the Separation Fence many Arab Palestinians with permanent residency status in Israel have returned to live in Jerusalem. As in the past most of this population movement is not reported to the Ministry of the Interior and therefore does not appear in official statistics". (The Jerusalem Institute For Israel Studies, 2013; Capítulo III, Population, p. 5)

es precario, escaseando las calles pavimentadas, aceras, plazas públicas, redes cloacales, y aunque se reconocen mayores índices de escolarización y mejores condiciones de vida que las de los palestinos que viven en Cisjordania, las escuelas no son numerosas, el acceso a un empleo estable es una oportunidad que escasea para la mayoría, y los índices de pobreza son significativamente altos (Dumper, 2009;3).

Inmersos en una población con estas características, para poder asegurarse cumplir con sus actividades cotidianas, incluso las más básicas, como ir a hacer las compras o a trabajar, los colonos israelíes dependen necesariamente, no sólo de las fuerzas de seguridad estatales (que encarnan en todo caso, el monopolio legítimo de la fuerza pública) sino también de su complementación con otras privadas más específicas. De acuerdo a Dumper "la mayor categoría de agentes de la seguridad privada en Jerusalén Este comprende a aquellos que son empleados para custodiar a los pequeños enclaves colonos israelíes dentro de los suburbios palestinos" (Dumper, 2013: 257).

Así es que la empresa de seguridad privada Mody'in Ezrachi, empleada por el Ministerio de Vivienda de Israel, se ocupa de garantizar la seguridad de todos estos pequeños enclaves jerusalimitanos: se emplean unos 350 guardias (en su mayoría, ex soldados con experiencia en combate, armados y que se trasladan en autos blindados) distribuidos entre 56 enclaves donde residen unas 2000 personas.

Existe preocupación de ciertos sectores de la sociedad israelí, como los que se expresan a través de organizaciones/think tanks como ACRI (The Association for Civil Rights in Israel) o ICAHD (Israeli Committee Against House Demolitions). Estas entidades nuclean abogados, investigadores y activistas que denuncian irregularidades e injusticias involucrándose en causas y litigios, cooperando con la población local. Justamente a través de la producción de informes, es que logran difundir los datos que arduamente recaban: los mismos comprenden testimonios de víctimas de algún tipo de abuso de poder o injusticia social, así como también estadísticas y relatos históricos sobre diversas coyunturas.

De un informe relativamente reciente de ACRI, "Unsafe Space" (2010), se desprenden observaciones notables acerca del desempeño de estas fuerzas privadas que han proliferado conforme pasaron los años. No sólo estos guardias que custodian a las familias de colonos portan armas letales en barrios civiles densamente poblados, sino que también actuarían con mayor laxitud que el personal perteneciente a la policía, dando lugar a fuertes tensiones dentro de las comunidades palestinas



que allí residen⁴. La siguiente cita es ilustrativa de la cuestión: *“Diferente de los oficiales de policía, cuya habilidad para hacer uso de la fuerza está limitada por guías estrictas establecidas por la ley y el procedimiento policial, los guardias de seguridad privados no están sujetos a estas leyes ni están obligados por las reglas básicas que guían a la policía en el desempeño de sus deberes. Los guardias de seguridad no siguen el mismo entrenamiento que los oficiales de policía, ni están bajo la supervisión de un cuerpo público administrativo. El resultado es que los guardias de seguridad empleados en Jerusalén Este no son regidos por ninguna definición clara, una situación que invita al abuso del poder”* (ACRI, 2010: 16-17).

Ahora bien, es claro que aquí estamos describiendo una realidad muy distante de aquella que inspiró el concepto de gobierno privado indirecto, el cual designa *“una forma inédita*

4 Para ahondar un poco más en esta cuestión, puede consultarse el informe, donde se recopilan testimonios valiosos para comprender el tipo de situaciones violentas desatadas en la vida cotidiana jerusalimitana. Esta cita explica brevemente la cuestión: *“The current Israeli approach to broad security has created bastions of guarded Jewish fortresses in the heart of Palestinian neighborhoods. However, for local Palestinian residents it has created an atmosphere of alienation and hostility. The tension inherent in such a situation escalates from time to time into conflicts between security guards and residents. From the testimony of residents, the neighborhood perception is that security guards are abusive, both against children playing in alleyways and against adults. They employ verbal and physical violence, and even make use of loaded weapons. Moreover, according to residents the security guards are “quick on the trigger”, and perceive themselves as holding the ultimate power to serve as arbiters of daily life in the neighborhood”*. (ACRI, 2010: 16)

de estructuración social que caracteriza actualmente a los Estados africanos. Esta forma de gobierno surge en un contexto de gran desabastecimiento, desinstitucionalización, violencia generalizada y desterritorialización. Es el resultado de una brutal revisión de las relaciones entre el individuo y la comunidad, entre los regímenes de la violencia, los de la propiedad y el orden tributario” (Mbembe, 2011: 69). No obstante, existen algunos elementos que hallamos en común. Si debiésemos establecer un análisis comparativo, podría establecerse que en cuanto a desabastecimiento, se enfrenta a una población con escaso acceso a servicios públicos y que no tiene sus necesidades básicas plenamente satisfechas, que en cuanto a desinstitucionalización, podría hablarse de aquella en que se desplazan a las agencias institucionales de la ANP dentro del territorio, y en cuanto a violencia generalizada y desterritorialización, pueden comprenderse ambos procesos en la articulación de la promoción de radicación de población judía israelí dentro de Jerusalén Este y la negación de permisos/demolición de viviendas, apoyado en el despliegue de dispositivos de seguridad tanto públicos como privados, técnicas cuyo objeto radica en la profundización de un proceso de reconfiguración identitaria dentro del territorio: israelizarlo, occidentalizarlo. En cuanto a la segunda parte de la caracterización, la relación entre el individuo y su comunidad es afectada en la medida que resulta sumamente

traumático para una familia palestina verse compelida a rearmar su vida después de la demolición de su casa, porque afecta la trama de vínculos familiares (de la madre en tanto madre y mujer; del varón como padre de familia y marido) provocando daños irreparables en los mismos (Margalit, 2006). Asimismo, se observan casos donde una persona que termina vendiendo su casa a una organización como Elad, que promueve la colonización israelí, tras concretar la operación decide mudarse a otra ciudad por cuanto el hecho de haber facilitado la entrada de colonos al barrio o poblado, comporta una humillación para su familia. Incluso en el pasado, las cortes palestinas sentenciaban con pena de muerte el vender propiedades en Jerusalén Este a judíos israelíes, si bien en 2004 dejaron de cumplirse; por otro lado, en tiempo más recientes, Mahmud Abbas, Presidente de la ANP, determinó que se sentenciaran estos actos como de “alta traición”⁵.

Para ir concluyendo, es patente que no nos encontramos en países como Camerún que abarca casi unos 500.000 km² y es hogar de 22 millones de personas, donde surgen regímenes paraestatales en los que los ejércitos dirigidos por los señores de la guerra locales administran la justicia y colectan los impuestos. Si bien localizamos de alguna manera un desmantelamiento de instituciones que mantenían un vínculo de asistencia con las bases locales, no podemos considerar que las oficinas de la ANP en Jerusalén Este hayan tenido ni el alcance, ni la profundidad, ni la efectividad, ni la vigencia de aparatos institucionales verdaderamente estatales. Mientras “*el repliegue de las sociedades africanas sobre ellas mismas tiene lugar en un contexto marcado por el desmantelamiento progresivo del Estado y por la negación de legitimidad de su intervención en el campo económico en nombre del aumento de la eficiencia*” (Mbembe: 79) el avance estatal israelí sobre el territorio anexado es constante y si bien ve brotes de violencia y atentados terroristas, éstos no constituyen una obstrucción al despliegue de su dominación. Al tiempo que el Estado avanza edificando su potestad a través de los dispositivos enunciados, se apoya en las fuerzas privadas de seguridad para calar en lo más hondo del nivel capilar e infinitesimal dentro del territorio, en otras palabras, en la parcela misma, en la mismísima cuadra donde habite una familia de colonos. De esta manera, se efectúa una retroalimentación de la radicalización de los factores chauvinistas que caracterizan la racionalidad política que aspira a realizar una Jerusalén unida y eterna, como capital del Estado Judío: la radicación y ampliación de los asentamientos se consolida y es posible reproducirla en el tiempo, por lo que la israelización del territorio se vuelve factible.

5 Pueden consultarse artículos periodísticos como los siguientes para ahondar sobre estas cuestiones: <http://www.theblaze.com/stories/2014/10/22/high-treason-palestinian-authority-cracks-down-on-selling-homes-to-israelis-to-keep-east-jerusalem-free-of-jews/>, <http://www.haaretz.com/news/national/.premium-1.620102>

Sin embargo, no estoy muy seguro que la dominación israelí pueda comprenderse a partir del concepto de necropolítica, reparo que debemos tomar, dada su estrecha relación con el de “gobierno privado indirecto”. Indica Mbembe que “*En la formulación de Foucault, el biopoder parece funcionar segregando a las personas que deben morir de aquellas que deben vivir. Dado que opera sobre la base de una división entre los vivos y los muertos, este poder se define en relación al campo biológico, del cual toma el control y en el cual se inscribe. Este control presupone la distribución de la especie humana en diferentes grupos, la subdivisión de la población en subgrupos, y el establecimiento de una ruptura biológica entre unos y otros. Es aquello a lo que Foucault se refiere con un término aparentemente familiar: el racismo*” (Mbembe, 2006: 21-22). Lo que no resulta tan claro, a mi entender, es que la segregación espacial y la penetración territorial de un grupo en poblados del otro, supongan una administración efectiva del poder mortífero del Estado, aún cuando se lleven a cabo políticas racistas. Dada la hipótesis de Meir Margalit, que sostiene que a partir del arribo de Nir Barkat al gobierno, se habría suscitado una mutación en el orden de aplicación de las políticas públicas sobre el territorio palestino, en función de generar una mejor economía de la dominación (disminuir el número de las demoliciones anuales, concesión de reconocimientos simbólicos), no sería del todo correcto hablar de la existencia de una necropolítica. Si así fuera, no tendría sentido el hecho que, primero, no toda la población se levantara en Intifada contra las autoridades israelíes, y segundo, no podría explicarse el hecho que muchos residentes palestinos de Jerusalén Este (que son ciudadanos jordanos) hayan solicitado el pasaporte israelí durante los últimos años, gracias a esta supuesta sofisticación de las políticas públicas, que Margalit entiende con el nombre de “ocupación light” (Margalit, 2013)⁶.

6 Antes de la llegada de Nir Barkat a la gobernación de la ciudad de Jerusalén en 2008 (quien aún se encuentra ejerciendo su cargo), el promedio de casas demolidas por año oscilaba entre 80 y 90, mientras que en años recientes, el número de demoliciones decreció a entre 10 o 15 por año (Margalit, 2013). Tampoco cabe orientar un análisis ateniéndonos a la mera alteración cuantitativa de las demoliciones, puesto que las multas imputadas a los edificios construidos ilegalmente y a los pocos edificios que actualmente se demuelen generan aún mayores ingresos que antes de la llegada de Barkat al poder, así como ni siquiera es que se haya facilitado o flexibilizado ni parcial ni sustancialmente el mecanismo de solicitudes de permisos de edificación. Más bien, aquí apuntamos a observar la irrupción de una modalidad de gobierno novedosa que, inclinándose por las ventajas de una dulcificación del trato para con los palestinos, permite diseñar una implementación sofisticada de las tecnologías de gobierno ya existentes, forjando una nueva economía del ejercicio del poder. Nos encontramos con la configuración de tácticas capaces de sostener y extender la dominación israelí sobre los territorios ocupados, volviendo a los “residentes” palestinos objeto de una *biopolítica* eficaz, capaz de tornarlos dóciles para gobernarlos y controlarlos mejor (Foucault, 2002). La creciente dependencia de los palestinos del sistema de seguridad social israelí, el atractivo real de un estilo de vida no afectada por la guerra ni por el hastío de reclamos políticos interminables por territorios difíciles de recuperar, el “peligro” que supone la militancia política para las familias dependientes del *welfare* israelí, provocar un corte aún mayor en la desgastada identidad entre los palestinos y las autoridades de la Autoridad Nacional Palestina, o bien con grupos extremistas como Hamas, forman parte del imaginario al que Barkat apela con respecto a la población palestina que gobierna (Margalit, 2013). No es que se haya alterado la estructura de dominación ni la asimetría de las relaciones de fuerzas presentes en Jerusalén Este; precisamente, las tecnologías implementadas por esta nueva modalidad de gobierno de Barkat, permitirían en todo caso, siguiendo a Margalit, profundizar la dominación del más fuerte sobre el débil generando menores pérdidas económicas (disminuyendo el uso de costosos equipos de demolición), así como un menor costo en la imagen pública de las autoridades políticas israelíes.

Que el Estado sea en este caso estructuralmente racista, tiene que ver, según lo veo, con el tipo de racionalidad política que está detrás de las tecnologías de gobierno que se decide implementar. Esto significa que, si no fuese establecido oficialmente que la comunidad política israelí se halla constituida tan solo por la parte integrante de la población bajo su jurisdicción que encarnase la condición de ciudadanos plenos (eminentemente el ser judíos, aunque otras minorías reciben un reconocimiento simbólico en desmedro de otras, por ejemplo, los drusos y árabes cristianos sobre los árabes musulmanes y beduinos) no sería tan difícil prever la posibilidad de efectuar una ruptura con ese principio de escisión tan sellado que hace a la identidad política israelí contemporánea y que distingue a la parte (judía) del todo (drusos, cristianos, musulmanes, beduinos, asirios, palestinos). En síntesis, que la actual incapacidad o imposibilidad de redefinición del límite de la frontera de la identidad política oficial se debe a un proceso en el cual los gobiernos de las últimas décadas han instaurado la noción de que la población judía israelí es idéntica al carácter del Estado, en tanto Estado democrático judío. Mientras en el pasado, otros gobernadores tendieron a la demolición masiva de viviendas, Barkat ha optado por un uso populista en el sentido descrito anteriormente, que se aleja de esa desmesura, para dar lugar a un empleo racional y eficaz de esa técnica de dominación, provocando incluso que la dominación resultase en un nivel de aceptabilidad mayor que en el pasado, e incluso, dándose una búsqueda por parte de ciertos sectores palestinos, de acceso a un estilo de vida diferente al propio, propendiendo a conseguir la ciudadanía israelí. Es cierto que no se trata de un movimiento masivo, pero esta situación comporta una transformación y un factor suficiente como para descartar la perspectiva de que en Israel impera un régimen susceptible de caracterizarse como necropolítico. En todo caso, más que la dispersión de las competencias y facultades estatales en manos de grupos institucionales privados y/o paramilitares ante el repliegue del Estado, la proliferación de organismos privados altamente especializados y específicos sirve de soporte último a un Estado que ha avanzado tanto en sus competencias y en su penetración territorial, que el ejercicio de su dominio se ve afianzado en la presencia de estas agencias de seguridad privadas.

Habiendo establecido estas cuestiones, disiento de las afirmaciones de Mbembe: *“Tal y como muestra el caso palestino, la ocupación colonial de la modernidad tardía es un encadenamiento de poderes múltiples: disciplinar, «biopolítico» y «necropolítico». La combinación de los tres permite al poder colonial una absoluta dominación sobre los habitantes del territorio conquistado. El estado de sitio es, en sí mismo, una institución militar. Las modalidades de crimen que este implica no hace distinciones entre enemigo interno y externo. Poblaciones enteras son el blanco del soberano. Los pueblos*

y ciudades sitiados se ven cercados y amputados del mundo. Se militariza la vida cotidiana. Se otorga a los comandantes militares locales libertad de matar a quien les parezca y donde les parezca. Los desplazamientos entre distintas células territoriales requieren permisos oficiales. Las instituciones civiles locales son sistemáticamente destruidas. La población sitiada se ve privada de sus fuentes de ingresos. A las ejecuciones a cielo abierto se añaden las matanzas invisibles.” (Mbembe, 2011: 52-53)

“Podría hablarse de un despliegue de dispositivos panópticos (organismos públicos complementados por agencias privadas en el nivel capilar de su articulación) que hacen de la distribución espacial de los cuerpos, la táctica principal para asegurar la presencia israelí y favorecer sus pretensiones soberanas territoriales sobre Jerusalén Este, provocando un fuerte impacto cultural dentro de la ciudad.”

Aunque este párrafo parezca ofrecer una descripción ajustada del caso palestino israelí, a mi entender, no considero que lo sea, pues incluso podría servir como caracterización más propicia para el caso de Hamás y su administración política en Gaza, donde sí se han dado y se dan purgas y atentados terroristas hacia dirigentes de su fuerza opositora, Fatah⁷, así como también ocurren célebres ejecuciones sumarias de supuestos colaboracionistas con Israel⁸, a cielo abierto⁹. Que en el encuentro entre manifestantes palestinos violentos y las fuerzas policiales o gendarmes israelíes que operan en Jerusalén Este se produzcan muertes aisladas, no quiere decir que el objeto del poder esté constituido por la matanza generalizada: más bien, como indica Foucault, el lado represivo del poder se desencadena en última instancia, sólo cuando es necesario que

7 Consultar: <http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2014/11/07/At-least-10-blasts-hit-Fatah-property-in-Gaza-.html>

8 Como se puede ver en notas sobre sucesos recientes como estos, donde se dieron ejecuciones sumarias: <http://www.theguardian.com/world/2014/aug/22/hamas-executes-suspected-infomers-gaza>, <http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israelgaza-crisis-hamas-says-18-suspected-collaborators-executed-9686162.html>

9 Como fue célebre en 2012 durante la Operación Pilar Defensivo, donde fotos de motociclistas arrastraban los cuerpos de supuestos colaboracionistas: <http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/hamas-executes-6-suspected-israel-collaborators-1.479316>

así lo sea, y en todo caso, las “pasiones mortíferas del Estado” sí brotan explícitamente cuando se decide aniquilar la casa de una persona que hubiese cometido un atentado terrorista, como represalia punitiva, resarcimiento social y venganza última del cuerpo social en el sentido más durkheimiano de la expresión. Por eso no coincido con el enfoque de Mbembe, pensando más atinado dejar a un lado la necropolítica para aprehender el ejercicio microfísico del poder a través del despliegue de los dispositivos biopolíticos comentados.

Entiendo que el caso jerusalimitano presenta una especificidad, que a su vez, la distingue del tipo de acontecimientos que proliferan en Cisjordania, donde el mismísimo ejército israelí se ve compelido a lidiar con situaciones de violencia que generan grupos de colonos que no logra controlar del todo. Asimismo, también existe convivencia de las fuerzas de seguridad presentes en ese territorio, más extenso que el de Jerusalén Este, y que son denunciadas por organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos tanto israelíes como palestinas.

La voluntad estatal de acceso al nivel capilar de la sociedad palestina y de los colonos en Jerusalén Este queda consagrada al servicio último de elementos que sólo operan fuera de su competencia, justamente, para operar mejor, con mayor profundidad y eficiencia. Resulta notable que en el plano microfísico de la escala de la dominación, sea necesario complementar la sofisticación de la vigilancia aérea y de los distintos departamentos policiales, con la laxitud de las normas con las que operan los guardias privados. En suma, podría hablarse de un despliegue de dispositivos panópticos (organismos públicos complementados por agencias privadas en el nivel capilar de su articulación) que hacen de la distribución espacial de los cuerpos, la táctica principal para asegurar la presencia israelí y favorecer sus pretensiones soberanas territoriales sobre Jerusalén Este, provocando un fuerte impacto cultural dentro de la ciudad. Aquí nos encontramos, tal vez, frente a otro tipo de gobierno privado indirecto, que articula la violencia y el racismo como extensión última del brazo del Leviatán ●

Bibliografía

Chiodelli, F (2012). The Jerusalem Master Plan: Planning into the Conflict en Jerusalem *Quarterly*, 51, Jerusalén.

Dumper, M (2009). “Two State Plus”: Jerusalem and the Binationalism Debate en Jerusalem, *Quarterly* - Issue 39, Jerusalén.

Dumper, M (2013). Policing divided cities: stabilization and law enforcement in Palestinian East Jerusalem. *International*

Affairs 89:5 (2013) 1247–1264.

Foucault, M (2002). *Vigilar y Castigar*. México: Editorial Siglo XXI.

Hills, A (2009). *Policing post-conflict cities. London and New York*. Londres: Zed Books.

Margalit, M (2006). “Discrimination in the Heart of the Holy City” en *Jerusalem Strategic Planning Series: Volume VII*. Jerusalén, Israel: The International Peace and Cooperation Center.

Margalit, M (2013). *Claves para la interpretación de la política israelí en Jerusalén Oriental*. Material de trabajo del Seminario del Posgrado en Ciencias Sociales “Jerusalén Microcosmos del conflicto árabe-israelí” de la Universidad Nacional General Sarmiento-IDES.

Mbembe, A (2011). *Necropolítica, seguido de, Sobre el gobierno privado indirecto*. España: Editorial Melusina.